Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras para Ayuda al Ciudadano

attac

El Grano de Arena

Informativo semanal

INFO 518 — 21 de setiembre de 2009

informativo@attac.org — http://attac-info.blogspot.com

¿Una corte mundial para las transnacionales?

Mundo

¿UNA CORTE MUNDIAL PARA LAS MULTINACIONALES? El debate sobre la necesidad de una legislación internacional que controle a las empresas multinacionales vuelve a estar de actualidad.

ADVIERTEN SOBRE POBREZA INFANTIL EN ALEMANIA. Uno de cada seis niños en Alemania crece en una situación precaria, este es el lapidario diagnóstico de un estudio realizado por la OECD a la que pertenecen los países industrializados. Las causas son muchas.

ABRACADABRA, AQUÍ ESTÁ LA DEUDA EXTERNA. Pasan el tiempo y los programas de cancelación, y los acreedores quedan. Obvio, es buen negocio para los ricos que los pobres vivan en rojo. Pero de eso no se habla.

Latinoamérica

PERU - CAJAMARCA: EXIGEN FIN DE CONCESIONES MINERAS EN ZONAS ALTOANDINAS Rondas exigen cierre y retiro de empresas mineras de cabeceras de cuenca y zonas altoandinas. Anuncian jornada de lucha y exigen libertad de Alejandro Izquierdo y cese de persecución de Estinaldo Cruz y dirigentes ronderos.

PARAGUAY: LOS DILEMAS DE LUGO A un año de su asunción, Fernando Lugo debe administrar al mismo tiempo varias crisis. Por su extensión este artículo se publicará en tres partes

BOLIVIA: DES-CERTIFICACIÓN Y AMENAZAS. Las tendencias dictatoriales no van a cambiar porque Barack Obama haya sustituido a George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus relaciones con nuestra América. Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie le otorgó, el gobierno de Washington "descertifica" a Bolivia en la política contra el narcotráfico; es decir, no le otorga su visto bueno, aduciendo la expulsión de la Drug Enforcement Administration (DEA).

Mundo

¿UNA CORTE MUNDIAL PARA LAS MULTINACIONALES?

Juan Hernández Zubizarreta/ Pedro Ramiro

Con la difusión de dos informes elaborados por el relator de la ONU para los derechos humanos, Martin Scheinin, y por el relator para la tortura, Manfred Nowak, se ha puesto de nuevo sobre la mesa la pertinencia de instaurar una Corte Mundial para los Derechos Humanos en la que puedan juzgarse los abusos cometidos por las grandes corporaciones.

Este debate viene de lejos: ya en los ‘70 tuvo lugar en el seno de la ONU una discusión sobre la firma de unas normas internacionales que regulasen las operaciones de las transnacionales. Pero a lo largo de los años ‘80 y, sobre todo, de los ‘90, las presiones empresariales hicieron que se fuera desactivando la posibilidad de exigir una normativa vinculante al respecto. A la vez, impulsado por las escuelas de negocios y las propias compañías multinacionales, fue ganando peso el discurso de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un paradigma de gestión empresarial basado en la autorregulación, la unilateralidad y la no exigibilidad jurídica. Y la creación del Global Compact (Pacto Mundial) –cuyo objetivo, según Kofi Annan en su lanzamiento en Davos hace diez años, era tejer una “alianza creativa entre la ONU y el sector privado”– supuso el aldabonazo definitivo para dar por buena toda esta evolución desde la lógica de la obligatoriedad hacia la filosofía de la voluntariedad.

Derechos humanos

Con tales antecedentes, no parece fácil que pueda cuajar una propuesta de este tipo. En enero de 2009, la ONU dejaba claro, por boca de su secretario general, el camino a seguir: “Nuestro tiempo exige una nueva constelación en la cooperación internacional: gobiernos, sociedad civil y sector privado trabajando juntos en pro de un bien colectivo mundial”, decía Ban ki-moon. Eso sí, quizás sea posible que la idea de crear una Corte Mundial para los DDHH signifique un cambio de tendencia en la ONU: “De repente el viento sopla en dirección distinta y las cosas se mueven deprisa. Hay que estar preparados y aprovechar el momento”, afirma Scheinin.

Ahora que, para ello, tendría que modificarse la postura del actual representante especial para DDHH y Transnacionales de la ONU. En ese sentido, la posición de John Ruggie, que vino apostando en sus informes de 2006 y 2007 por el Global Compact como la vía más eficaz y realista para el control de las multinacionales, ha variado en los últimos tiempos: ahora considera que las prácticas de las transnacionales afectan a todos los DD HH y que las medidas tomadas por los Estados para proteger a la ciudadanía son insuficientes.

Desde el punto de vista de los movimientos sociales es positivo que este debate pueda ser incluido en la agenda pública. Y es que no tiene sentido que, por un lado, los derechos de las grandes corporaciones se protejan mediante la fuerza de la lex mercatoria, mientras que, por otro, sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social se dejan en manos de la ética. Por eso, la creación de un código normativo internacional que delimite las responsabilidades legales de las multinacionales, junto con la puesta en marcha de un Tribunal Internacional de transnacionales y de un Centro de Estudios y Análisis sobre multinacionales en la ONU, constituyen una reivindicación impostergable.

Algunas empresas en el punto de mira

REPSOL YPF: ha sido acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, de contaminar el territorio mapuche en Argentina y el Parque Nacional Yasuni en Ecuador, así como de violar los derechos humanos en Colombia.

UNIÓN FENOSA: se ha visto muy cuestionada por la mala prestación del servicio eléctrico (apagones, alza de tarifas, falta de mantenimiento…) en Nicaragua, Guatemala y Colombia. ENDESA se ha enfrentado a diferentes movilizaciones y denuncias por la construcción de sendas centrales hidroeléctricas en el alto Bio-Bio y en Aysén, ambas en Chile.

BANCO SANTANDER: está siendo duramente criticado por financiar varias represas en el río Madera, en Brasil. El BBVA ha sido denunciado por financiar, entre otros, el proyecto gasífero de Camisea (Perú) y el Oleoducto de Crudos Pesados (Ecuador), proyectos muy agresivos social y ambientalmente.

Diagonal) Mundo – Red ECO

ADVIERTEN SOBRE POBREZA INFANTIL EN ALEMANIA

Daphne Grathwohl - Eva Usi

Uno de cada seis niños en Alemania crece en una situación precaria, este es el lapidario diagnóstico de un estudio realizado por la OECD a la que pertenecen los países industrializados. Las causas son muchas.

El estudio no es el primero que denuncia la precaria situación en la que vive una buena parte de la niñez alemana, pese a que esta nación destina hasta 20% más que otros países industrializados a respaldar con una red de apoyos a las familias con hijos. Quien tiene un hijo en Alemania puede contar con el apoyo financiero del Estado y de otras instituciones caritativas a partir del nacimiento.

Un 40% de estas ayudas son entregadas directamente a los padres de los niños, el resto son destinados a respaldar instituciones de cuidado infantil como jardines de niños y otras instituciones. Algunas de estas ayudas son un gran apoyo para padres que trabajan pero también reciben dinero padres y madres que se encuentran desempleados.

En el momento en el que llega un niño al mundo, sus padres reciben el llamado Kindergeld (dinero infantil), equivalente a 164 euros al mes por cada infante. A partir del tercer hijo la cantidad aumenta paulatinamente.

Una red de ayudas

Las mujeres que trabajan reciben adicionalmente el llamado Mutterschaftsgeld (dinero por maternidad) que desembolsa directamente el seguro contra enfermedad. Durante un período de entre seis y ocho semanas tras el nacimiento las madres económicamente activas perciben sus salarios íntegros sin trabajar.

Posteriormente ya sea el padre o la madre, puede solicitar el llamado Elterngeld (dinero de los padres). Durante 14 meses el Estado paga alrededor de dos terceras partes del último salario percibido al mes, cantidad que tiene un límite máximo de 1.800 euros y un piso mínimo de 300 euros para los desempleados.

Un salario mensual promedio en Alemania oscila alrededor de 3.300 euros antes de impuestos, que neto asciende a unos 1.800 euros, que equivale a la máxima retribución que otorga el Estado. Los hijos de padres desempleados tienen derecho a ayudas adicionales, que oscilan entre 215 y 360 euros al mes.

Para comprender mejor estas cifras hay que considerar que el mínimo de existencia sobre el que se orienta la ayuda estatal ascendió en el año 2008, según información del gobierno, a 6,000 euros en el caso de adultos, cantidad equivalente a la mitad en el caso de los infantes.

Críticas de activistas

Activistas de organizaciones no gubernamentales, como el Deutsche Kinderschutzbund –la Asociación Alemana de Protección a la Infancia, consideran que la ayuda estatal que es destinada directamente a los niños es muy reducida. Según los cálculos de la organización, un adolescente de 13 años tiene aproximadamente 2 euros disponibles para alimentos y en un país como Alemania en donde los víveres son caros, esa cantidad no es suficiente para una alimentación balanceada.

La activista Tina Laux, de la Agencia Diacónica con sede en Bonn, que es responsable de zonas conflictivas afirma que la pobreza no es solo falta de recursos materiales. “La pobreza es multidimensional, significa tener un acceso limitado a servicios de salud, de educación, cultura y vivienda. Muchas familias habitan en espacios reducidos en barrios proletarios, en donde la vivienda misma se encuentra en condiciones deplorables.

Barrios proletarios

Ejemplo de ello es la situación de una residente en una zona conflictiva de Bonn. “Siempre nos prometen que tendremos suficiente, pero a fin de cuentas los únicos que reciben recursos son los que de por sí tienen dinero. Ellos reciben privilegios fiscales pero a nosotros no nos toca nada. Yo tengo que trabajar, mi hijo se está capacitando para ejercer un oficio y lo único que recibimos es una ayuda complementaria del Estado", se lamenta.

Una parte de los ingresos de los padres no es gravada con impuestos con la intención de que sea utilizada para cubrir las necesidades básicas de los hijos. Esta cantidad libre de impuestos asciende a unos 6.000 euros al año. Pero la cantidad libre de impuestos es alternativa al dinero infantil. O uno o el otro. Si el dinero infantil es mayor, entonces no se está exento de impuestos. Sólo un cinco por ciento de los padres que ganan muy bien, se benefician más de la cantidad libre de impuestos que de el posible dinero infantil que recibirían del Estado.

Es necesaria una mejor distribución de los recursos para que los padres acaudalados reciban menos ayudas, sin embargo esta alternativa es descartada por expertos pues sería inconstitucional. El hecho de que algunos padres sean más ricos que otros, no justifica que el Estado los trate peor. El motivo de la ayuda es el hijo, no la desigual en la percepción de los ingresos de la población.

Exhortan a modificar el modelo alemán

Críticos del modelo alemán exhortan a modificar el actual sistema respaldando mejor a otras instituciones. “Los niños en desventaja, así como sus familias necesitan mucho más apoyo. Si los padres se encuentran desempleados las familias viven una situación muy difícil”, afirma Tina Laux.

Según la activista el desempleo se hereda y el actual modelo no otroga a las personas afectadas una nueva perspectiva ni las ayuda a salir de la situación miserable en la que viven y hay una serie de organizaciones e instituciones que podrían dar una ayuda decisiva.

“Hay que invertir más en jardines de niños e instituciones de atención a la niñez, de manera que los niños reciban una atención competente y esmerada. Hay que pagar más a los educadores para que cuiden mejor a los niños y los padres puedan dedicarse a trabajar”, señala Laux. La experta añade que se trata de una problemática económica pero también social y política, pues no se resuelve exclusivamente aumentando el dinero infantil, ni la cantidad del salario que es eximida de impuestos. “Es algo mucho más complejo”, concluye.

Un artículo de DW-World, la página web de la Deutsche Welle.

ABRACADABRA, AQUÍ ESTÁ LA DEUDA EXTERNA

¡Ay con esas cuentas que no se terminan de pagar!

Por la Redacción de APM |

Contabilizadas las deudas externas en millones de dólares y según estadísticas de sus respectivos bancos centrales, Brasil debe 272.966; Argentina118.153; México 127.813; Chile 66.557; Venezuela 50.378 y Colombia 47.037. Y podríamos seguir con las cuentas, pero para qué, si como enseña el dicho popular, para muestra sobra un botón.

Hubo países, como Argentina, que negociaron importantes programas de quita; otros recortaron sus operaciones de ingresos a través del sistema financiero mundial. En ámbitos del MERCOSUR se intentaron proyectos aun inconclusos, como el del Banco del Sur y en otros espacios de integración son intensas las búsquedas de mecanismos sanos de crédito. Sin embargo la deuda está, crece y cada día son gigantes las sumas que se transfieren a los centros de poder global.

Según el especialista Eric Toussaint, presidente del CADTM-Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo), el proceso de endeudamiento externo de América Latina – registrado con fuerza durante la pasada década del ’80 y que aun mantiene sus efectos perversos sobre las estructuras económicas de la región, se encuentra entre los factores que

explican la llamada crisis financiera global, que se hizo sentir sobre todo durante el segundo semestre del año pasado.

Así se desprende de un reciente artículo publicado por el experto en cadtm.org y en el portal Visiones Alternativas.

“La deuda es uno de los factores más poderosos de este sometimiento (consecuencia del diseño mundial que emerge tras la Segunda Guerra Mundial), pues en el momento en que la administración y el ejército de los países colonizadores abandonaban físicamente el país que conquistaba su independencia, los gobiernos de los nuevos Estados eran incitados a endeudarse masivamente. Los acreedores aparentaban ignorar la malversación —aunque incluso la alentaban—que las clases dirigentes locales hacían de los fondos recibidos. Los países del Sur, cada vez más endeudados, debían aumentar continuamente su producción para la exportación, y obtener así las divisas necesarias para el reembolso de la deuda. Actuando de este modo, comenzó entre ellos una competencia para poner en el mercado bienes primarios (algodón, café, cacao, bananas, azúcar, cacahuete y otras oleaginosas, minerales...) que la economía de los países del Norte necesitaba. Esta superproducción sería dramática para la evolución del precio de estos bienes, tanto más cuando los países del Norte sufrieron, a partir de 1973, la primer gran recesión después de la segunda guerra mundial”, recuerda Toussaint.

En ese sentido, considera que los años ochenta del siglo pasado estuvieron marcados por un cambio en las relaciones de fuerza, tanto entre los países industrializados y los de la Periferia como entre los capitalistas y los asalariados.

Ese proceso fue el resultado de la combinación de varios factores que el especialista belga señala como: “la decisión de Paul Volcker, actual consejero económico de Barack Obama, por la que aumentó brutalmente el tipo de interés a partir de fines del año 1979, cuando era director de la Reserva Federal de Estados Unidos; el ‘contragolpe petrolero’ de 1981 que puso fin a una política de precios elevados de los bienes primarios favorable a los países exportadores de la Periferia (todos los precios de las materias primas y de los productos del agro sufrieron una continuada tendencia a la baja desde 1981 hasta comienzos del año 2000); la ofensiva general de los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan contra los asalariados, en el marco de la crisis económica generalizada entre 1980 y 1982 (las relaciones de fuerza se deterioraron ostensiblemente, tanto para los países de la Periferia como para los asalariados)”.

“Se produjeron transferencias masivas de fondos desde los países de la Periferia hacia los países más industrializados, principalmente por medio de los pagos de la deuda externa. A mediados de la década de los ochenta, la transferencia neta sobre la deuda pasó de positiva a negativa, ya que los gobiernos de los países en desarrollo (PED) debieron desembolsar, cada año, una cantidad mayor que la que recibían como nuevos préstamos de parte de los acreedores, sin conseguir, sin embargo, acabar con la deuda. Por el contrario, el stock de la deuda continuó creciendo (…). Por lo tanto, los PED transfirieron hacia sus acreedores el equivalente a cerca de 8 planes Marshall”, recuerda Toussaint.

En Estados Unidos fueron los bancos, las compañías de seguros y los demás inversores institucionales los que tuvieron un fuerte crecimiento de rentabilidad, mientras que la tasa de beneficio del sector industrial progresó mucho menos.

“En resumen, la gran transformación que comenzó en los años ochenta, continuación de la ofensiva lanzada por el capital contra el trabajo, suponía un crecimiento económico cuyos resultados estaban repartidos de manera cada vez más desigual. El crecimiento estaba apoyado en una acumulación de deudas en el marco de una financiarización creciente de la economía. Más tarde o más temprano, este modelo de acumulación debía entrar en crisis cuando el eslabón más débil de la cadena cediera (el mercado de las `subprime`). Y eso sucedió a mediados del 2007”, concluye el experto belga.

Por todas las razones expuestas es que incluimos el tema de la deuda externa en esta edición dedicada a “los olvidados”

Latinoamérica

CAJAMARCA-PERU: EXIGEN FIN DE CONCESIONES MINERAS EN ZONAS ALTOANDINAS

PRONUNCIAMIENTO

Mediante el presente pronunciamiento damos a conocer los acuerdos tomados el día 05 de septiembre en el caserío de Ichuquinua, distrito de Llapa, provincia de San Miguel, regiòn Cajamarca estando presentes los dirigentes de la junta directiva de la Federación Regional de R. C. de Cajamarca y de las federaciones provinciales, distritales, comités zonales, centrales y bases ronderas, frentes de defensa de las provincias de San Miguel, Santa Cruz, y del distrito de Chugur de la Provincia de Hualgayoc-Bambamarca y la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, por lo concerniente ante la opinión pùblica hacemos de conocimiento lo siguiente.

PRIMERO: Ratificar la autonomía e independencia y unidad de nuestra organización ronderil, defensa de la vida, cuidado y protección de las aguas, Recursos Naturales, medio ambiente y la apuesta por un desarrollo agropecuario sostenible.

SEGUNDO: No permitir más expansión minera en cabeceras de cuenca de las zonas alto andinas de las provincias de San Miguel, San Pablo, Santa Cruz y Hualgayoc-Bambamarca y en toda la región Cajamarca, por poner en riesgo la vida humana, la flora, la fauna, así como la desaparición y disminución de aguas de cuencas y micro cuencas afectando la producción agropecuaria de los valles alto andinos de Cajamarca y los hermosos valles agrícolas de la región Lambayeque y contaminación del medio ambiente en general.

TERCERO: Cese y retiro inmediato de la empresa minera Buenaventura (proyecto la Zanja) y de otras transnacionales mineras que hasta la fecha están ilegalmente, en estas zonas alto andinas, provocando inseguridad e inestabilidad social, hostigamiento, y hasta apropiaciones ilícitas de terrenos privados, violando los derechos individuales y colectivos en las comunidades.

CUARTO: Que, el gobierno regional de Cajamarca, los gobiernos provinciales, distritales y de centro poblado de las provincias en mención, saquen ordenanzas municipales declarando los territorios en zonas intangibles y a su vez impulsen los ordenamientos territoriales de zonificacion ecológica y económica tal como ofreció don Jesús Coronel, actual Presidente Regional, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible y sustentable en la región Cajamarca y promuevan y cumplan el convenio 169 de la OIT (el derecho de consulta a los pueblos y comunidades).

QUINTO: A través de memoriales reiterativos que se hará llegar al gobierno regional, gobierno central, poder Ejecutivo, Legislativo, Ministerio de Energía y Minas, Defensorìa del Pueblo, pidiendo que ordenen el inmediato retiro de la empresa minera Buenaventura de la zona la Zanja y de otras transnacionales; pero a su vez para que ya no se otorgue mas permisos ni mas expansión territorial a las mineras en exploración y explotación tal es el caso de Yanacocha y Gold Fíes, mientras no se haga efectivo el ordenamiento territorial de Zonificacion ecológica y económica y lo estipulado en el convenio 169 de la OIT y demás normas legales. De no ser atendidos ni escuchados en los próximos días estaremos emprendiendo medidas de lucha y de lo que pueda suceder en adelante será de su única responsabilidad de las autoridades en mención.

SEXTO: Con el fin de dar seguimiento a la lucha legal frente estos problemas ambientales y conflictos sociales promovidos y provocados por el gobierno central y la transnacionales mineras en la región Cajamarca; las rondas campesinas en coordinación con los frentes de defensa, y algunos alcaldes patriotas de las provincias y distritales de San Miguel, Santa Cruz Hualgayoc-Bambamarca, San Pablo, Chota y la Junta de Regantes Chancay Lambayeque, realizaremos asambleas provinciales, interprovinciales; por ello nos estaremos reuniendo el día 25 de septiembre en el distrito de Chancay Baños de la Provincia de Santa Cruz, en donde estaremos tomando otros acuerdos con respecto a estos temas.

SEPTIMO: Exigimos la inmediata libertad del compañero Alejandro Izquierdo Torres dirigente de la federación regional de rondas campesinas recluido en el penal de Santa Cruz, desde el mes de diciembre del año 2008 y el cese de procesos judiciales, persecución y hostigamiento al presidente provincial de rondas campesinas de Santa Cruz Estinaldo Quispe Mego y de otros dirigentes ronderos y ronderas en la región

FEDERACION REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS Y URBANAS DE CAJAMARCA BASE DE LA CENTRAL UNICA NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS (CUNARC - PERU)
Mauricio Quiroz Torres
limaprovincias@hotmail.com

PARAGUAY: LOS DILEMAS DE LUGO
Primera parte

Diego González

A un año de su asunción, Fernando Lugo debe administrar al mismo tiempo varias crisis. Por un lado, su flamante paternidad que manchó su imagen pública tanto dentro como fuera del Paraguay. Pero al día de hoy ese escándalo no es lo que desvela al presidente paraguayo. Sucede que su estrategia de navegar sin barco propio sobre un conglomerado de fuerzas casi antagónicas está rozando el abismo.

Así, los viejos liberales pelean espacio por espacio, tribuna por tribuna con la izquierda, que avanza en un proceso de unidad sectorial. A su vez, los liberales se desangran en eternas internas, pujando por una sucesión que deje a su línea interna lo mejor parada posible de cara a las presidenciales de 2013. La circunstancia es de tal tensión que hasta el mismísimo vicepresidente ya impulsó el juicio político para el presidente para luego romper la alianza gubernamental, que unía derecha e izquierda. Ahora, desde una posición ambigua, los liberales no terminan de ser gobierno ni oposición. Lo que ahora exigen, en boca del senador Blas Llano, es "cogobernar".

El 2 de abril de 2008 la "Alianza Patriótica para el Cambio" encabezada por Lugo sacó 40,83% de los votos que lo catapultaron a la presidencia. El debate ineludible giraba en torno a la conformación del frente gubernamental. Sucede que ya desde que su figura ganaba adeptos en oposición al tradicional Partido Colorado del por entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, había un dilema. La izquierda, pequeña y dispersa, por sí sola no acumulaba lo suficiente como para quebrar la hegemonía de 61 años de los colorados. El Partido Liberal Radical Autentico (PLRA), los azules, sólo podían tener expectativas si se colaban detrás del fenómeno del outsider Lugo, quien prometía reforma agraria y renegociación con Brasil por el Tratado de la represa de Itaipú. Así fue como se conformó este nuevo frente, gelatinoso, inestable, en el que conviven derecha e izquierda.

Hoy, los liberales representan el 82% de la Alianza en las cámaras de senadores y de diputados. El 17% restante pertenece a representantes de izquierda. Es por esto que Lugo los necesita para la gestión, para el día a día. Y esto los liberales lo saben. Es por eso que lo utilizan como moneda de cambio negociando apoyos y presiones con su supuesto propio gobierno.

Sin ir más lejos, a menos de un año de haber asumido, el vicepresidente Federico Franco, del PLRA, ha impulsado sin éxito el juicio político en contra del presidente, amparado en la crisis por la paternidad del ex obispo. Ya en aquel entonces anunciaba sin eufemismos que estaba "listo para gobernar".

La novedad de los últimos días está dada en que el otrora aliado fiel a Lugo, el ahora senador y antes ministro de justicia y trabajo Blas Llano, se plantó y exigió cogobernar mientras anunciaba el retiro del partido de la alianza pero no del gobierno. Como explicó el titular del PLRA, Gustavo Cardozo, su partido no devolverá los tres ministerios que les dio Lugo: "Esos cargos nos pertenecen como mayoría absoluta, por ser nuestros electores los que votaron mayoritariamente por el presidente Lugo en las elecciones de 2008".

Los liberales hoy se debaten internamente sobre las medidas a tomar. Tres son las tendencias: una, encabezada por Efraín Alegre, Ministro de Obras Públicas, que por la envergadura del Ministerio que maneja ha ido convirtiéndose en un actor de peso. Su estrategia es acercarse a Lugo y esperar desde allí a las presidenciales del 2013. Otra ala, liderada por el senador Blas Llano, con un pie dentro y otro fuera, busca la mejor correlación de fuerzas posible para su sector, negociando y retaceando apoyos de acuerdo a la estricta coyuntura. Pero también existe una tercera línea, encabezada por el vicepresidente, abiertamente rupturista. Las dos últimas son las principales y antagónicas.

BOLIVIA: DES-CERTIFICACIÓN Y AMENAZAS

Antonio Peredo Leigue*

Las tendencias dictatoriales no van a cambiar porque Barack Obama haya sustituido a George W. Bush y anunciado un nuevo trato en sus relaciones con nuestra América. Una vez más, arrogándose atribuciones que nadie le otorgó, el gobierno de Washington "descertifica" a Bolivia en la política contra el narcotráfico; es decir, no le otorga su visto bueno, aduciendo la expulsión de la Drug Enforcement Administration (DEA).

Agregando más leña al fuego, un señor anunció, por un canal de televisión local, que su organización había establecido que los cultivos de coca en Bolivia se estimaban en 54 mil hectáreas. Dijo algo más: para el consumo tradicional, y entrecomilló esta palabra, se requería 7 mil hectáreas de cultivo. Ni el nombre y cargo que ocupa esta persona ni el nombre de la institución que representa, aparecieron en ningún momento
en la entrevista televisada.

Pero el tema es la certificación o el retiro de ésta. El más grande consumidor de drogas (cocaína, opio, morfina, 'crack', anfetaminas y un largo etcétera) se da el rango de fiscal y envía agentes de la DEA a otros países, mientras las mafias que operan en Estados Unidos hacen negocios multimillonarios con las drogas. Es más: ese organismo, hace más de 20 años y en un escándalo que se ventiló en tribunales norteamericanos, fue acusado de controlar la elaboración de cocaína en la más grande fábrica que había entonces en Bolivia, venderla en Estados Unidos y entregar las ganancias al Cnel. Oliver North, jefe de seguridad de la Casa Blanca para la compra de armas que la CIA entregaba a la llamada 'contra' de Nicaragua y los grupos subversivos iraníes. El caso "Irán-contras" fue absolutamente documentado, pero los acusados quedaron en libertad y North aclamado como héroe por haber hecho ese trabajo sucio. Claro que igual reacción motivó la oficial del ejército norteamericano que administró la prisión Abu Ghraib, en Irak, donde se cometieron abusos humillantes y torturas impactantes contra los presos iraquíes.

Ese es el gobierno que da o quita certificados. Por supuesto, "certificó" al gobierno de Colombia, primer productor de coca destinada al narcotráfico, el cual recibe la mayor ayuda de Washington para éste y otros rubros, pues permite que se rocíe desfoliadores en amplias regiones con efectos nocivos que rebasan sus fronteras y firma acuerdos secretos para la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio, amenazando a la democracia en la región.

La presencia de la DEA en Bolivia, a partir de la ley 1008 aprobada en mayo de 1988, de control del cultivo de coca, permitió la presencia en nuestro país de un número indeterminado de agentes de ese organismo que gozaban de privilegios diplomáticos y actuaban directamente en la erradicación de los cultivos. Su base en Chimoré, al centro del Chapare, no podía ser fiscalizada por ninguna autoridad boliviana y, al revés, mantenía un control directo sobre la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), que actuaba según sus instrucciones. Esta fuerza estaba entrenada para erradicar los cultivos y sólo de modo secundario en la detección del narcotráfico. La prueba de la distorsión de la labor de la DEA en Bolivia es su actividad en la fábrica de drogas en Huanchaca, donde los narcotraficantes asesinaron al científico Noel Kempff Mercado y sus acompañantes; de allí la droga para la operación "Irán-contras". Pero es también el hecho de que, desde la expulsión de ese

organismo, se ha descubierto una cantidad mayor de fábricas de droga y se ha confiscado cantidades muy superiores a las que registraba la DEA.

Decir que, el gobierno de Washington está interesado en restablecer relaciones plenas con Bolivia, es contradictorio con las restricciones que se trata de imponer a nuestro país. El tema de las drogas no puede determinar el carácter de esa relación. Pero, aun suponiendo que así fuese, se hace necesaria una revisión de los términos en que está planteada. Habrá que revisar y modificar la Ley 1008, debe estudiarse un acuerdo distinto al que se firmó en Bogotá durante el gobierno de Jaime Paz y, sobre todo, establecer programas de lucha contra el narcotráfico en condiciones de respeto mutuo. Esto comienza por reconocer que las relaciones deben ser respetuosas de las políticas que se desarrollen en ambos países, de coordinación en los temas sociales y de equilibrio en la cuestión económica. De otra manera, las relaciones diplomáticas seguirán complicándose.

***Antonio Peredo Leigue es periodista, senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.Agencia Latinoamericana de Informacion**

Edición: Susana Merino